



Departamento Norte de Santander

Distrito Judicial de Cúcuta

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LOS PATIOS

Los Patios, Cuatro (04) de noviembre dos mil veintidós (2022).

RADICADO	PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDA O
54405-31-03-001-2012-00253-00	Ejecutivo	Hospital Universitario Erasmus Meoz	ECOOPSOS EPS

Se encuentra al Despacho los expedientes enlistados en el cuadro para referirse al recurso de reposición y en subsidio el de apelación interpuesto por la demandante de fecha 19 de octubre de 2022, mediante el cual no se accede a entregar los dineros a la misma y se levantan las medidas cautelares, a fin de adicionar el auto de fecha 2 de noviembre de 2022, en los términos del artículo 287 del CGP.

La parte demandante, dentro del escrito del los recursos interpuesto manifiesta:

Ahora bien, respecto al auto recurrido en donde hace referencia alasentenciaT-053de2022, es preciso señalar que dicha decisión no es procedente por cuanto el principio de inembargabilidad no es absoluto, lo resuelto la sentencia mencionada hace referencia sobre la inembargabilidad de las cuentas maestras y en el SGP cuyos dineros tienen una destinación específica, a los cuales se le aplica la excepción al principio de inembargabilidad “siempre y cuando las obligaciones reclamada estuvieran como fuente alguna de las actividades de las cuales se estaban destinando los recursos del SGP (educación, SALUD, agua potable y saneamiento básico)” (sentencia AP4267-2015), tal y como sucede en este caso, que la orden de embargo tiene como fundamento un crédito originado en una de las actividades cubiertas por los recursos del sistema general de seguridad social en salud y de participaciones asignados a salud como lo es el pago por parte de ECOOPSOS, de los servicios de salud prestados a sus afiliados por mi representada la ESE HUEM. De la misma manera tenemos el pronunciamiento de la Contraloría General de la República en la circular 01 de 2021.

Sin embargo conforme lo establece el auto que se adiciona, se tiene que el frente a lo previsto en la sentencia aludida, se itera, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Civil Familia, señaló en el Expediente T-8.255.231, Acción de Tutela incoada por COOMEVA E.P.S. contra el JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, que en su momento adujo:

“...Ahora bien, en segundo lugar y teniendo en cuenta que el reparo concreto formulado por la EPS accionada se concreta en establecer la inembargabilidad de los recursos de salud destinados por el ADRES a la empresa promotora, para la prestación del servicio de salud, los cuales tienen que ver específicamente con las cuentas maestras de dicho sector, por

Palacio de Justicia, Segundo Piso – Oficina 3

Calle 36 N° 0-28 - Los Patios N. de S.

Correo: jcctolospat@cendoj.ramajudicial.gov.co

reciente pronunciamiento jurisprudencial. Previo a resolver dicho reparo concreto, advierte la Sala que, conforme lo dispone el artículo 15 de la Resolución 3042 del 2007 emitida por el Ministerio de Protección Social, las cuentas maestras son “las registradas para la recepción de los recursos del SGP en Salud y a las cuales ingresarán la totalidad de los recursos de las subcuentas de régimen subsidiado, de prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios de la demanda y de salud pública colectiva de los Fondos de Salud de los entes territoriales”. De igual forma, se advierte que la Ley 1753 del 20152, creó la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, como entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica y autonomía tanto administrativa como financiera, con el fin de garantizar el adecuado flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de manera que dentro de sus funciones asignadas, se le ordenó administrar los recursos, realizar pagos, efectuar giros directos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías con autorización del beneficiario de los recursos, los cuales conforme establece el artículo 67 de la mencionada normativa y previendo lo establecido en el Decreto 2265 del 2017, se hacen a través de las cuentas maestras registradas por la EPS ante dicha administradora, la cual debe ser utilizada exclusivamente para el recaudo de cotizaciones del régimen contributivo del SGSSS.

Ahora bien, en lo que respecta a la inembargabilidad de los recursos citados, se precisa que dicha prohibición tiene la virtualidad de propender por la preservación de esos dineros y aun cuando es la “regla general” adoptada por el legislador, no debe perderse de vista que fue la Corte Constitucional quien consideró que la restricción no puede operar como una regla, sino como un principio y por ende no debe tener carácter absoluto, pues debe conciliarse con otros derechos constitucionalmente reconocidos, así lo puntualizo en la sentencia C-1154 de 2008 y lo reiteró en la C-313 del 2017 al disponer:

“(…) no pueden perderse de vista otros valores, principios y derechos constitucionales como la dignidad humana, el principio de seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y el derecho al trabajo, entre otros. Es por ello que (la norma cuestionada) acepta la imposición de medidas cautelares, para lo cual advierte que las mismas se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales (…)”.

“(…) podrán imponerse medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial, y, si esos recursos no son suficientes para asegurar el pago de las citadas obligaciones, deberá acudir a los recursos de destinación específica (…)”. (Subrayado propio).

Postulado éste que venía siendo aplicado por la Corte Suprema de Justicia, quien en sentencia AP4267-20153 puntualizó que:

“(...) resulta razonable que los dineros de COOSALUD EPS-S - girados del SGP-, puedan ser embargados cuando la medida cautelar pretende garantizar el pago de obligaciones contenidas en títulos ejecutivos emitidos, precisamente, en razón de los servicios de idéntica naturaleza prestados a los afiliados del sistema de seguridad social vinculados a la EPS-S, máxime que el artículo 21 del Decreto 28 de 2008, hace referencia a la inembargabilidad de los recursos del sistema general de participaciones que aún hacen parte del presupuesto de las entidades públicas, no cuando ya han sido entregados a las EPS.(...)”

(...) entender que el “principio de inembargabilidad” cobija los recursos de salud ya girados por el Estado a las EPS-S, para los casos de cobro mediante procesos ejecutivos contra estas entidades por servicios de la misma naturaleza- no se observa razonable, porque si el principio de inembargabilidad de los recursos del SGP, como lo tiene reconocido la Corte Constitucional, es asegurar el destino social y la inversión efectiva de los mismos, sería desproporcionado por carencia de idoneidad, que frente al incumplimiento de las empresas promotoras en el pago de sus obligaciones contraídas con los prestadores del servicio de salud, resulten amparadas por el mencionado principio, pues implicaría favorecer la ineficacia y el colapso del sistema de seguridad social del cual hacen parte las IPS (artículo 155 de la Ley 100 de 1993), toda vez que se auspiciaría el no pago de los servicios sanitarios, con lo cual no llegarían los dineros de la salud a donde fueron destinados por el Estado, al menos no oportunamente, en detrimento de las IPS -públicas, mixtas o privadas-, cuya viabilidad financiera depende precisamente de que los pagos por los servicios que prestan les sean diligentemente sufragados.”(subrayado propio).

Postura que de igual forma reiteró en sentencia STC15986-2019, en donde abordó el asunto en sede de tutela y expuso dentro de sus consideraciones que:

“(...) los recursos del Sistema General de Participaciones destinados de manera específica para la salud no pueden ser, en principio, objeto de medidas cautelares; empero, se insiste, de presentarse las excepciones jurisprudenciales reseñadas, es preciso efectuar su análisis para establecer la viabilidad de cautelar tales rubros.

Por tanto, corresponde estudiar cada caso en particular para determinar la embargabilidad de los recursos con destinación específica, los cuales son objeto del Sistema General de Participaciones. (...)

(...)Ahora, no hay duda de la viabilidad de cubrir las acreencias reseñadas con dineros provenientes del Sistema General de Participaciones, esto es, con destinación específica.

Ciertamente, para las deudas laborales ello fue determinado expresamente por la Corte Constitucional en la anotada

sentencia C- 1154 de 2008, posibilidad igualmente avalada para atender las obligaciones derivadas de fallos judiciales y títulos, únicamente, cuando aquellos tienen “(...) como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico) (...)” , lo cual significa que esas acreencias deben estar relacionadas con la prestación de alguno de esos servicios, porque de lo contrario, no podrían usarse los dineros dirigidos a tales actividades para sufragarlas”.

Es por lo anterior, que en virtud de lo normado en el parágrafo único del artículo 594 del Código General del Proceso, aun cuando claramente existe la prohibición de embargo de recursos de la seguridad social, este tribunal previó una autorización a los funcionarios administrativos o judiciales para que procedieran a decretar la cautela sobre bienes inembargables, en los eventos que por ley fuere procedente, siempre y cuando invocaran en la orden de embargo el fundamento legal para su procedente, que en el caso de ejecutivos, es el pago de obligaciones que tienen como fuente las actividades propias de la destinación de recursos, esto es, la prestación del servicio de salud.

... Sin embargo –como se vio ut supra–, posteriormente la Corte reformuló el alcance de las excepciones a la inembargabilidad en atención al nuevo enfoque del SGP incorporado por el Constituyente a raíz del Acto Legislativo No. 4 de 2007. Dicha reforma constitucional supuso una modificación del marco normativo gracias al cual se fortaleció el afán por asegurar el destino social y la inversión efectiva de aquellos recursos del SGP, lo que condujo a que se reevaluaran las condiciones que tornaban viable el embargo de los mismos. Producto de dicho análisis, la Sala Plena efectuó un “acople” de la jurisprudencia y señaló que los recursos de destinación específica del SGP sólo podían comprometerse subsidiariamente para hacer efectivas las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia judicial, en el evento de que los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no fueran suficientes para atender tales acreencias.

En razón de este nuevo criterio, luego la Corte precisaría que el principio general de inembargabilidad se predica incluso frente a las obligaciones contractuales contraídas por las entidades territoriales para la prestación de los servicios que se financian con los recursos del SGP.

Lo anterior fue ratificado más recientemente cuando, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Salud, este Tribunal señaló que la aplicación del principio general de inembargabilidad de los recursos de la salud “deberá estar en consonancia con lo que ha sentado y vaya definiendo la jurisprudencia”, remitiéndose entonces a lo decidido en el fallo de control abstracto que, a manera de criterio hermenéutico de armonización, precisó que era factible embargar los recursos de destinación específica del SGP para garantizar el pago de obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia si y solo si se verificaba que para asegurar la

cancelación de dichos créditos resultaban insuficientes los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial.

En ese sentido, no cabe duda de que el precedente constitucional vigente ha delimitado las condiciones para exceptuar el principio general de inembargabilidad de los recursos de la salud correspondientes al SGP en los siguientes términos: (i) que se trate de obligaciones de índole laboral, (ii) que estén reconocidas mediante sentencia, (iii) que se constate que para satisfacer dichas acreencias son insuficientes las medidas cautelares impuestas sobre los recursos de libre destinación de la entidad territorial deudora.

En cambio, respecto de los recursos provenientes de las cotizaciones al SGSSS recaudados por las EPS, la jurisprudencia constitucional no ha introducido Excepción alguna a su inembargabilidad”.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que los recursos del sistema general de seguridad social en salud tienen como fuente las cotizaciones de los afiliados, que estos aportes son públicos, que su destinación es específica y en todo caso ostentan la calidad de inembargables, sin que la jurisprudencia constitucional hubiese introducido Excepción alguna respecto a su inembargabilidad.

*... Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que los recursos del sistema general de seguridad social en salud tienen como fuente las cotizaciones de los afiliados, que estos aportes son públicos, que su destinación es específica y en todo caso ostentan la calidad de inembargables, sin que la jurisprudencia constitucional hubiese introducido Excepción alguna respecto a su inembargabilidad, considera esta Magistratura que le asiste razón al recurrente y por lo mismo erró la juez de instancia al decretar la medida de embargo de los recursos que la Administradora del Sistema General de Seguridad Social en Salud debe girarle a la EPS Ecoopsos, por lo que procedente resulta revocar el proveído objeto de inconformidad **como fue suficientemente explicado por el cambio de jurisprudencia**, pues los recursos del sistema general de seguridad en salud no pueden ser objeto de cautela desde ningún punto de vista...”.*

Así las cosas, con base al cambio de jurisprudencia fijada por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia aludida y siendo que se encuentran embargados dineros que hacen parte de los recursos del sistema general de seguridad social en salud, es del caso levantar dichas medidas y en consecuencia hacer entrega a la entidad demandada de los dineros que se encuentran por cuenta de esta ejecución, es del caso no acceder a la reposición impetrada y en consecuencia concede el recurso de apelación en el efecto devolutivo en los términos del artículo 322 del CGP.

En mérito de lo anterior, el **Juzgado Civil del Circuito de Los Patios,**

RESUELVE

PRIMERO: Adicionar el auto de fecha 2 de noviembre de 2022, en el sentido de no reponer el auto de fecha 19 de octubre de 2022. Por lo expuesto.

SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo contra el auto de fecha 19 de octubre de 2022 den los términos del artículo 322 del CGP.

TERCERO: COPIA del presente auto, servirá de OFICIO, de conformidad con el Artículo 111 del C. G. del P.

Los escritos o solicitudes relacionados con las notificaciones efectuadas por estados electrónicos y/o las actuaciones surtidas en este proceso, deberán ser enviadas o remitidas preferiblemente en formato PDF, usando algún tipo de firma para identificar al autor o emisor del documento, en caso de presentarse mediante apoderado, debe ser enviada desde el correo electrónico inscrito en el Registro Nacional de Abogados, ÚNICAMENTE al siguiente correo: jcctolospat@cendoj.ramajudicial.gov.co.

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE

ROSALIA GELVEZ LEMUZ

Juez

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LOS PATIOS
NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La anterior providencia se notifica por estado No. **076**
Hoy: 08- NOVIEMBRE-2022 a las 8:00 a.m.

CLAUDIA PATRICIA CARRILLO MORENO
Secretaria

Firmado Por:
Rosalía Gelvez Lemus
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil
Los Patios - N. De Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **273b038f42a4eb053680fa4bdaa96253d43b1fea7b074f1e027c16b2f63d9fc0**

Documento generado en 04/11/2022 05:48:15 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>